



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

I

El Anteproyecto sometido a informe tiene por objeto, conforme describe su artículo 1, “determinar el contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad”. A tal efecto, a lo largo de su articulado se establece la delimitación de los titulares del derecho, así como su contenido material, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la organización de los servicios que prestarán la asistencia a los titulares del derecho y el procedimiento de designación de abogado y procurador de oficio, el procedimiento para el reintegro de las cantidades que correspondan a los colegios de abogados y procuradores y el establecimiento de controles para garantizar la calidad en la asistencia jurídica gratuita y el régimen disciplinario. Además, se regulan la asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos y la aplicación en España de los tratados y convenios internacionales sobre asistencia jurídica gratuita.

El Anteproyecto vendría así a reemplazar y derogar el régimen contenido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, debiendo tener particularmente en cuenta que en el texto resultante se integrarían las numerosas modificaciones sufridas en dicha Ley como consecuencia de la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

II

Desde el punto de vista de la aplicación de las normas reguladoras del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal el contenido del Anteproyecto implicará una serie de tratamientos de datos necesarios para la acreditación de la concurrencia de los requisitos exigibles para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita tanto por parte de los Colegios de Abogados, a fin de proceder al reconocimiento provisional del derecho como por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.



Una gran parte de dichos tratamientos derivará precisamente de la propia tramitación del procedimiento y se referirá a aquella información que habrá sido facilitada por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita. De este modo, dicha información habrá sido facilitada por el propio solicitante y en consecuencia será objeto de tratamiento previo consentimiento del mismo, no planteándose problema alguno en relación con la posible colisión del Anteproyecto con las normas de protección de datos, toda vez que el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 legitima el tratamiento de los datos de carácter personal obtenidos con el consentimiento del interesado, pudiendo incluso hacerse referencia a la legitimación derivada del hecho de que el tratamiento es llevado a cabo por las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, toda vez que siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, dichas competencias se atribuyen por una norma con rango de Ley como será tras su aprobación la sometida a informe.

Del mismo modo, el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999 habilita, a sensu contrario, la cesión de datos entre Administraciones Públicas cuando la cedente y la cesionaria ejerzan una misma competencia o se trate del ejercicio de competencias sobre la misma materia. De este modo, las cesiones de datos entre los Colegios de Abogados y Procuradores y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se encontrarían amparadas en la norma que se acaba de mencionar, al atribuirse a ambas competencias de tramitación y resolución en los expedientes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Al margen de esta consideración preliminar, existen determinadas previsiones del Anteproyecto sometido a informe que implican el tratamiento, y en ocasiones cesión de datos de carácter personal, siendo preciso valorar si las habilitaciones que a tal efecto pudiera establecer la Ley para determinar la legitimación de dichos tratamientos y cesiones resulta ajustada a lo dispuesto en la normativa de protección de datos, y en definitiva en los principios que configuran el contenido esencial del derecho fundamental.

En este sentido, si bien es cierto que la Ley puede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, establecer causas específicas legitimadoras del tratamiento de los datos de carácter personal sin que se haga preciso en tales supuestos recabar el consentimiento de los afectados, debe tenerse en cuenta que tales limitaciones deberán en todo caso resultar respetuosas con el contenido esencial del derecho fundamental, conforme exige el artículo 53.1 de la Constitución. Así lo ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional en la Sentencia 17/2013, de 31 de enero, en cuyo fundamento jurídico 4 se señala lo siguiente:

“En conclusión, tal como establece nuestra doctrina, es claro que la LOPD no permite la comunicación indiscriminada de datos personales entre Administraciones Públicas dado que, además, estos datos están, en principio, afectos a finalidades concretas y predeterminadas que son



las que motivaron su recogida y tratamiento. Por tanto, la cesión de datos entre Administraciones Públicas sin consentimiento del afectado, cuando se cedan para el ejercicio de competencias distintas o que versen sobre materias distintas de aquellas que motivaron su recogida, únicamente será posible, fuera de los supuestos expresamente previstos por la propia LOPD, si existe previsión legal expresa para ello [art. 11.2.a) en relación con el 6.1 LOPD] ya que, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE, los límites al derecho a consentir la cesión de los datos a fines distintos para los que fueron recabados están sometidos a reserva de ley. Reserva legal que, como es obvio, habrá de cumplir con los restantes requisitos derivados de nuestra doctrina- esencialmente, basarse en bienes de dimensión constitucional y respetar las exigencias del principio de proporcionalidad- para poder considerar conforme con la Constitución la circunstancia de que la norma legal en cuestión no contemple, por tanto, la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para autorizar la cesión de datos.”

De este modo deberá verificarse si dicha habilitación resulta coherente con los principios de protección de datos y, particularmente, con los consagrados en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999. En este sentido, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2 que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Teniendo en cuenta lo anterior son tres, fundamentalmente, los aspectos regulados por el Anteproyecto que requieren una especial atención desde el punto de vista de su relación con el derecho fundamental a la protección de datos: la publicación de los dictámenes emitidos por el Comité de Consultas regulado por el artículo 9 del Anteproyecto, el régimen de acceso a datos de carácter personal para la comprobación de la concurrencia de los requisitos económicos exigidos para el reconocimiento del derecho, regulado esencialmente por el artículo 18, al que se remiten no obstante otras normas del Anteproyecto, y la información que habrá de ser objeto de comunicación o incluso publicación dentro del régimen de subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita, regulado por el Título V del texto sometido a informe de esta Agencia.

III

En cuanto a la actividad del Comité de Consultas, la Exposición de Motivos del Anteproyecto señala que “para asegurar una aplicación homogénea de la ley que garantice la igualdad en el acceso a este derecho de todos los ciudadanos, se crea un comité de consultas en el seno del Ministerio



de Justicia, cuya composición se determinará reglamentariamente y en el que participarán las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia. Corresponderá a este órgano velar por la unidad de criterio entre los responsables de la gestión del sistema”.

En este sentido, el artículo 9 del texto dispone en su apartado 1 que “con la finalidad de lograr una aplicación homogénea de la ley, en especial, en relación con el ámbito personal, el contenido y el alcance del derecho, se crea un Comité de Consultas en el seno del Ministerio de Justicia, en el que participarán las diferentes Administraciones públicas implicadas, cuya composición y régimen de funcionamiento se desarrollará reglamentariamente por el Gobierno”, añadiendo el apartado 2 que “los informes emitidos por este Comité de Consultas serán publicados en la web del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las demás Administraciones públicas competentes”.

La divulgación de los informes emitidos por el citado Comité implica, desde el punto de vista de la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal, una cesión de datos, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a) si la comunicación de datos se encuentra amparada por una norma con rango de Ley.

En relación con este punto debe recordarse lo que acaba de indicarse en cuanto a que la habilitación legal para el tratamiento debe resultar respetuosa con los principios que configuran el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, siendo especialmente relevante traer a colación en este momento lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Como se ha indicado, la finalidad por la que se crea el Comité de consultas, órgano que no aparecía previsto en la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2013 es la de homogeneizar los criterios de aplicación de la norma, a fin de garantizar una interpretación uniforme de los mismos que evite un eventual riesgo de discriminación en el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.



Pues bien, para el cumplimiento de tal objetivo ha de considerarse irrelevante la inclusión de los datos de carácter personal relacionados con las personas que hubieran solicitado ese reconocimiento. Debe en particular tenerse en cuenta que dicha información comprenderá no sólo datos de carácter económico o patrimonial de los interesados, sino que incluso puede incluir información acerca de su condición de víctimas de determinados delitos o relacionada con su salud, dado que tales criterios son tenidos en cuenta a la hora de establecer el Anteproyecto quiénes pueden ser titulares del derecho.

De este modo, sería preciso que se previese expresamente en el Proyecto la divulgación contenida en el mismo de forma que se evitase la referencia a los datos personales del interesado solicitante o, en su caso, de terceros distintos de los propios miembros del Comité de consultas que pudieran haber intervenido en el expediente respecto del que se emite el correspondiente dictamen.

Ello se lograría en caso de que el Proyecto incorporase en su artículo 9.2 la previsión de que los datos serán previamente sometidos a un procedimiento de disociación, definido por el artículo 3 f) de la Ley Orgánica 15/1999 como “todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable”.

En consecuencia, se propone completar el mencionado artículo 9.2 del Proyecto señalando el texto resultante lo siguiente:

“Los informes emitidos por este Comité de Consultas serán publicados en la web del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las demás Administraciones públicas competentes, **previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos pudieran incorporar.**”

IV

Como se ha indicado, una de las previsiones del Anteproyecto que reviste una mayor relevancia en lo referente a la aplicación de las normas de protección de datos es la contenida en el artículo 18.1, a cuyo tenor “para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y, en especial, la información relativa a las rentas y al patrimonio declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita, incluyendo en su caso su cónyuge o pareja de hecho, los Colegios de Abogados realizarán las comprobaciones y recabarán toda la información que estimen necesaria. Esta información la recabarán de la Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles o cualesquiera otros cuya información pueda obtenerse por vía telemática. La Administración tributaria facilitará la información necesaria en el marco de lo establecido en la normativa tributaria”.



Añade a su vez el primer inciso del artículo 18.2 que “la Comisión efectuará las comprobaciones que estime oportunas y podrá oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situación económica del solicitante”, lo que parece implicar igualmente el acceso por la Comisión a los datos a los que se refiere el apartado 1 del artículo.

El Anteproyecto modifica en este punto el régimen actualmente contenido en la Ley 1/1996, toda vez que la misma limitaba el alcance de la facultad de comprobación en el párrafo primero de su artículo 17, al disponer que “Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la Comisión podrá realizar las comprobaciones y recabar la información que estime necesarias. En especial, podrá requerir de la Administración Tributaria correspondiente la confirmación de la exactitud de los datos de carácter tributario que consten en la documentación de esta naturaleza presentada con la solicitud. También podrá la Comisión oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situación económica del solicitante”. De este modo, el acceso a la información se limitaba, en principio y sin perjuicio de las cláusulas abiertas establecidas en el texto, a la información de naturaleza tributaria que obrase en los ficheros de la Administración Tributaria y el ejercicio de la potestad de comprobación correspondía exclusivamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y no a los Colegios de Abogados.

Por el contrario, el Anteproyecto parece otorgar esta facultad a ambos órganos, estableciendo expresamente en su artículo 16.1 que “si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el petitionerario se encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2, el Colegio de Abogados, subsanados los defectos advertidos que impidan su tramitación y realizadas las comprobaciones necesarias, procederá en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de Abogado, comunicándolo inmediatamente al Colegio de Procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo, en el plazo máximo de tres días, se designe Procurador que asuma la representación, así como a indicar las prestaciones que se reconocen”. Además, conforme al inciso final del artículo 16.4 “la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita devolverá al Colegio de Abogados aquellos expedientes cuya solicitud presente deficiencias o que no vengán acompañados de la documentación necesaria para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y patrimoniales del solicitante”.

Además, el artículo 38.2 dispone en su párrafo tercero que “los Colegios de Abogados tendrán la obligación de revisar, a instancia de parte, si el beneficiario ha venido a mejor fortuna. A tales efectos recabarán la información necesaria en la forma prevista en el artículo 18”.



El Anteproyecto también incorpora una modificación en lo que parece referirse a la legitimación última del acceso, por cuanto en la Ley 1/1996 esa legitimación, con el alcance que la misma comprendía, se encontraba fundada en la propia habilitación legal para la cesión de los datos por parte de la Administración Tributaria que se incorporaba al artículo 17 del texto. Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 14 del Anteproyecto se indica que “En la presentación de la solicitud también se hará constar la autorización expresa al Colegio de Abogados y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para la consulta de los datos a que se refiere el artículo 18, sin la cual no se dará trámite a la misma”.

El análisis de este precepto exige tener en cuenta dos aspectos esenciales que, por otra parte, se encuentran interrelacionados: la legitimación en que puede fundarse la cesión de los datos consecuencia de los accesos a los que se refiere el artículo 18.1 y la aplicación en la norma citada del principio de proporcionalidad, sobre todo a partir de la referencia general contenida en su penúltimo inciso, que habilita el acceso por los Colegios de Abogados a “cualesquiera” registros accesibles por “vía telemática”.

En relación con la primera de las cuestiones mencionadas el problema a resolver se refiere a la posible contradicción entre los artículos 14 y 18.1 del Anteproyecto, dado que el segundo parece establecer una previsión clara, precisa e incondicional que legitima por sí misma el acceso a los registros mencionados (al margen de su extensión, que constituye como se ha dicho la segunda de las cuestiones a valorar), mientras que el artículo 14 parece hacer depender tal verificación de la autorización del interesado solicitante del reconocimiento del derecho; es decir, en términos de la Ley Orgánica 15/1999, del consentimiento del interesado.

Debe en este sentido recordarse que el artículo 3 h) de la Ley Orgánica 15/1999 define el consentimiento del interesado como “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”. A tales requisitos debe añadirse que tanto el artículo 6.3 de la Ley Orgánica como el artículo 17 de su Reglamento de desarrollo establecen claramente que el consentimiento del interesado tendrá carácter revocable.

Ciertamente, la Ley Orgánica 15/1999 establece en determinados preceptos que los datos no podrán ser cancelados cuando concurren determinadas circunstancias. Así el artículo 16.5 de la Ley dispone que “los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado”.



Sin embargo, en estos supuestos el tratamiento no se basa en el consentimiento del interesado, sino en la existencia de una norma legal habilitante del tratamiento de una previa relación jurídica entre el responsable y el interesado que implica el tratamiento de los datos, lo que nos conduce a la conclusión anteriormente señalada.

Pues bien, en el marco establecido en el Anteproyecto sometido a informe no cabe considerar que el consentimiento del interesado pueda ser revocado durante la tramitación del procedimiento de reconocimiento del derecho, por cuanto en ese caso no podría producirse aquél al no poder realizarse las comprobaciones exigidas, ni que el consentimiento prestado sea libremente facilitado, dado que se exige con carácter obligatorio la autorización para la realización de las citadas comprobaciones, no pudiendo el interesado optar por autorizar o no el acceso a los datos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el supuesto previsto en el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, en que el interesado puede optar por autorizar la obtención de los documentos que ya obren en poder de la Administración o aportar por sí mismo los citados documentos.

De este modo, entiende esta Agencia que el acceso a los datos se debería basar únicamente en la existencia de una norma legal habilitante del tratamiento, no pudiendo hacerse referencia, en puridad, a una “autorización del interesado”.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo ya vino a hacer referencia a esta cuestión cuando en su sentencia de 15 de julio de 2010 declaró nulo lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, que disponía que “cuando se formulen solicitudes por medios electrónicos en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la autenticidad de los datos”, al entender que esa verificación debería venir configurada en una norma con rango de Ley, lo que, al contrario que en el supuesto planteado en abstracto por dicho precepto, sí sucedería en el que es ahora objeto de estudio.

Una vez clarificada la cuestión relativa a la legitimación para la realización de las actividades de comprobación establecida en el Anteproyecto objeto de informe, deberá ahora analizarse si en caso de entender que existe una limitación al derecho fundamental a la protección de datos fundada en una Ley, dicha norma respeta el contenido esencial del derecho fundamental, lo que exige valorar, esencialmente, el alcance de los accesos planteados en el texto sometido a informe.

En este sentido, como ya se ha reproducido con anterioridad, el artículo 18.1 del Anteproyecto prevé el acceso a la información con la finalidad de “verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y, en especial, la



información relativa a las rentas y al patrimonio declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita” y se refiere al acceso a “la información que (los Colegios de Abogados) estimen necesaria”, y en particular la obrante en la Administración Tributaria, el Catastro, la Seguridad Social, los Registros de la Propiedad y Mercantiles “o cualesquiera otros cuya información pueda obtenerse por vía telemática”.

En cuanto a la Administración Tributaria, el artículo 95.1 de la Ley General Tributaria dispone que “Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”, estableciendo a continuación una serie de excepciones, entre las que el apartado k) se refiere a las cesiones que tengan por objeto “la colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados”.

Por su parte, en el ámbito de la Seguridad Social, el artículo 66 del texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social no establece una previsión similar.

Por último, el artículo 53.2 del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario dispone en su letra d) que “podrán acceder a la información catastral protegida, sin necesidad de consentimiento del afectado (...) los organismos, corporaciones y entidades públicas, para el ejercicio de sus funciones públicas, a través de la Administración de la que dependan y siempre que concurren las condiciones exigidas en el párrafo a)”, referido a “los órganos de la Administración General del Estado y de las demás Administraciones públicas territoriales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, con las limitaciones derivadas de los principios de competencia, idoneidad y proporcionalidad”.

Precisamente es posible que la inexistencia de una previsión específica relativa a estos accesos, en particular por referirse al acceso a la información por parte de una Administración corporativa, haya sido la que ha justificado el establecimiento de un régimen de autorización en el artículo 14, sin perjuicio de que como se ha señalado esta Agencia no considera este régimen el más idóneo para el cumplimiento del objetivo perseguido por la norma, al no cumplir el consentimiento los requisitos legalmente exigidos en cuanto a su libertad y revocabilidad. No obstante, es preciso indicar que en lo referente a los accesos a los datos que obrasen en poder de la Administración Tributaria la vigente Ley 1/1996 prevé los mismos sin contar con la “autorización” o consentimiento del interesado.

Como indica el precepto, la finalidad de los accesos consiste en la comprobación del cumplimiento de los requisitos relacionados con la situación económica y patrimonial de los afectados exigidos por el Anteproyecto para que proceda el reconocimiento del derecho, siendo así que el conocimiento de la información tributaria relacionada con los rendimientos, la existencia o no de titularidades que pudieran constar en el registro de la propiedad o en el catastro inmobiliario o el historial de vida laboral del interesado pueden considerarse ajustados a dicha finalidad, lo que permitiría considerar que las habilitaciones legales establecidas en el artículo 18.1 en cuanto a los accesos concretos que en el mismo se describen sería respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos.

Sin embargo el precepto, como se ha indicado, concluye con una cláusula de cierre que hace referencia a cualesquiera registros, establecido además que el acceso a los mismos deberá poder verificarse por vía telemática.

La referencia contenida en esta cláusula abierta, máxime cuando el precepto establece que el acceso se producirá “en especial” para la comprobación de las rentas y el patrimonio del solicitante del beneficio de asistencia jurídica gratuita pudiera resultar desproporcionado, en cuanto no sería posible conocer de la previsión legal el objeto del acceso y los concretos datos a los que podría accederse, siendo así que debería especificarse que el acceso se limitaría a lo necesario para el conocimiento de las citadas rentas y patrimonio, al depender el reconocimiento del derecho en los supuestos en que se vincula a los recursos del afectado únicamente de la cuantificación de dichos recursos o ingresos del afectado en cómputo anual y su relación con el indicador público de renta de efectos múltiples, conforme a los artículos 3 y 5 del Anteproyecto, teniendo en cuenta los criterios de valoración establecidos en la primera de estas normas, cuyo apartado 2 dispone que “para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario o cualquier otro signo externo de riqueza, ingreso o actividad que ponga de manifiesto una capacidad económica efectiva para sufragar los gastos del litigio”.

Al propio tiempo, la limitación de los accesos a aquellos registros cuya información pueda obtenerse por vía telemática podría limitar el conocimiento por los Colegios de Abogados de la concurrencia o no de los criterios de valoración establecidos en el artículo 3.2 citado, siendo así que ello podría incluso redundar en perjuicio del interesados.

Por todo ello, se considera necesario que se delimite el criterio de acceso a los registros mencionados en el artículo 18.1 del Anteproyecto, vinculando dicho acceso con los criterios de valoración del artículo 3.2 del Anteproyecto y que se suprima la referencia a que los registros deberán ser accesibles por vía telemática.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones en lo referente a la comprobación del nivel de rentas del interesado y las normas vinculadas con esta potestad:

1. Modificar el párrafo segundo del artículo 14 del Anteproyecto suprimiendo la referencia a la “autorización” del interesado solicitante del beneficio y reemplazándola por la obligación de información a aquél del posible ejercicio de las potestades de comprobación del artículo 18.1, siendo el texto resultante el siguiente:

“En el momento en que se produzca la presentación de la solicitud se informará al solicitante acerca de la posibilidad atribuida al Colegio de Abogados y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para la consulta de los datos a que se refiere el artículo 18.”

2. Modificar el último inciso de la primera frase del artículo 18.1 del Anteproyecto en el sentido de limitar los accesos a “cualesquiera otros” registros, suprimiéndose igualmente la referencia a que los mismos hayan de ser accesibles por vía telemática, resultando así el texto del artículo 18.1 el siguiente:

“Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y, en especial, la información relativa a las rentas y al patrimonio declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita, incluyendo en su caso su cónyuge o pareja de hecho, los Colegios de Abogados realizarán las comprobaciones y recabarán toda la información que estimen necesaria. Esta información **podrá recabarse, en particular**, de la Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles. La Administración Tributaria facilitará la información necesaria en el marco de lo establecido en la normativa tributaria.

Del mismo modo será posible el acceso a la información que pudiera obrar en otros registros relacionada con los indicios a los que se refiere el artículo 3.2 de esta Ley.”

V

En lo que respecta a las previsiones del Título V del Anteproyecto debe hacerse en primer lugar referencia a las comunicaciones de datos que pueden traer causa de las normas relacionadas con el control y supervisión de la efectiva prestación de la asistencia jurídica gratuita por parte de los abogados y procuradores, a fin de proceder al abono de la subvención correspondiente a los respectivos Colegios profesionales.



En este sentido, el artículo 40.2 del texto sometido a informe dispone que “la gestión de la subvención está sujeta a las obligaciones que impone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo, así como las normas de las Comunidades Autónomas en esta materia cuando corresponda a éstas dicha gestión”, añadiendo el artículo 40.3 que “sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que correspondan al órgano concedente, la Intervención General de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas ejercerá el control financiero de las subvenciones respecto de los Consejos Generales y los Colegios profesionales como entidades colaboradoras, según lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo, así como en las normas presupuestarias que sean de aplicación”.

Por su parte, el párrafo segundo del artículo 42 establece que “los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto entidades colaboradoras para la gestión de la subvención, estarán sometidos a las obligaciones establecidas para dichos sujetos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo así como en las normas presupuestarias que resulten de aplicación”. Finalmente, conforme al artículo 43.1 se dispone que “Dentro de los cuatro primeros meses de cada año, los Consejos Generales justificarán ante la Administración competente la aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio inmediatamente anterior. Si incumplieran dicha obligación, se suspenderán los sucesivos libramientos hasta la rendición íntegra de la correspondiente cuenta”.

Las comunicaciones de datos derivadas de lo dispuesto en las normas citadas traen causa de lo dispuesto en la Ley 38/2003, a la que se remite expresamente el Anteproyecto. Su artículo 44.1 establece que “el control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras por razón de las subvenciones de la Administración General del Estado y organismos y entidades vinculados o dependientes de aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a los fondos de la Unión Europea.

Añade el artículo 46.1 que “los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden, dentro del ámbito de la Administración concedente, a la Intervención General de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las corporaciones locales, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

- a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.



b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

Y el artículo 46.2 concluye que “la negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37 de esta Ley, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder”.

Finalmente, en cuanto a las competencias de los órganos de la Intervención, el artículo 47 de la Ley 38/2003 establece que “los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, en el ejercicio de las funciones de control financiero de subvenciones, serán considerados agentes de la autoridad. Tendrán esta misma consideración los funcionarios de los órganos que tengan atribuidas funciones de control financiero, de acuerdo con la normativa comunitaria”, estableciendo en cuanto al deber de colaboración el artículo 47.2 que “las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos autónomos y otros entes de derecho público y quienes, en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control financiero de subvenciones”.

A la vista de todo ello, las comunicaciones derivadas de la función de control a la que se está haciendo referencia en este lugar se encuentran ya previstas en la Ley 38/2003, que otorga cobertura legal, en conexión con el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 a las cesiones de datos previstas en los artículos 40, 42 y 43 del Anteproyecto.

VI

Resta por último hacer referencia, dentro de las normas contenidas en el Título V del Anteproyecto a las previsiones referidas al control de calidad del servicio y elaboración de estadísticas.



El artículo 44 establece como principio general que “Las Administraciones públicas competentes, con la colaboración de los Colegios de Abogados y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, velarán por el mantenimiento del adecuado nivel de calidad y competencia profesional en los servicios de asistencia jurídica gratuita, estableciendo para ello los sistemas de evaluación que resulten precisos, así como un mecanismo de valoración por los beneficiarios de la asistencia según la carta de derechos que les será entregada”.

Por su parte, el artículo 45.1 impone a los Colegios profesionales, a los efectos de la elaboración de estadísticas, el deber de recopilación periódica de “los datos que resulten necesarios sobre el servicio prestado y sus beneficiarios teniendo en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo; se incluirán en todo caso los datos identificativos de los Abogados y Procuradores, los servicios prestados y el resultado estimatorio o desestimatorio obtenido, incluyendo el número de resoluciones procesales de archivo por falta de subsanación de defectos procesales”, añadiéndose que “reglamentariamente se podrá prever que las estadísticas incorporen otros datos adicionales”. Finalmente se dispone que “los Colegios profesionales pondrán esta información en conocimiento de las Administraciones públicas competentes”.

Y el artículo 45.2 dispone que “En todo caso, los Consejos Generales y los Colegios profesionales estarán obligados a presentar dentro de los cuatro primeros meses de cada año una memoria anual sobre el funcionamiento de los servicios de asesoramiento, orientación jurídica, asistencia letrada y asistencia jurídica gratuita durante el año anterior, en la que deberán incorporarse datos precisos sobre el cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad establecidos. En esta memoria se indicará el número de sentencias recaídas cuando alguna de las partes tuviera reconocida la asistencia jurídica gratuita y su carácter estimatorio o desestimatorio, así como los recursos interpuestos y el orden jurisdiccional al que se referían aquellas resoluciones. El Gobierno podrá prever reglamentariamente otras previsiones que se hayan de hacer constar en la memoria anual”.

De este modo, las actividades relacionadas con el control del servicio podrán implicar el tratamiento por parte de los Colegios de datos de carácter personal no sólo de los abogados y procuradores, sino también de los propios beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a menos que se haga constar expresamente que los datos identificativos de éstos últimos no serán objeto de tratamiento, refiriéndose esa información no sólo a las condiciones concurrentes en aquéllos sino al propio contenido del pleito en el que fuera parte el beneficiario.

En relación con dicho tratamiento debe nuevamente tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad en el tratamiento, tantas veces mencionado a lo largo del presente informe. En el presente caso, el tratamiento de la información tiene por objeto valorar si el servicio prestado lo ha sido en las

debidas condiciones de calidad, para lo que resulta esencial tener conocimiento del resultado del litigio en que es parte el beneficiario del derecho. Sin embargo la información identificativa de dicho beneficiario, más allá de la que le permita tener en cuenta las variables mencionadas en el artículo 45.1 del Anteproyecto, no parece resultar necesaria para el cumplimiento del objetivo de evaluación de la calidad de los servicios prestados.

En el mismo sentido, y siguiendo lo establecido en una inmensa pluralidad de normas, la inclusión de datos estadísticos en una memoria anual de actividades no precisa de la inclusión en la misma de ningún dato de carácter personal.

Las previsiones contenidas en el Anteproyecto parecen ser respetuosas con la conclusión alcanzada en el sentido de que no parecen exigir la inclusión de datos de carácter personal en la memoria ni tampoco la recogida de datos identificativos en la elaboración de las estadísticas o las respuestas dadas por los beneficiarios a efectos de valorar la prestación de la asistencia jurídica gratuita. No obstante el problema se plantea porque tanto el apartado 1 como el apartado 2 del artículo 45 parecen dejar abierta la posibilidad de que la información que haya de ser recopilada para la elaboración de estadísticas o la incluida en la memoria anual puedan ampliarse en los términos que se establezcan reglamentariamente, corriéndose así el riesgo de que dichas previsiones reglamentarias pudieran exigir el tratamiento adicional de información que permita la identificación directa o indirecta del beneficiario, en el caso de las estadísticas o de aquél y del profesional prestador del servicio en el de la memoria anual.

De este modo, a nuestro juicio, sería preciso que se clarificasen ambas previsiones para evitar una futura incorporación de datos que no hayan sido previamente disociados.

Por ello, se propone completar las previsiones de los apartados 1 y 2 del artículo 45 del Anteproyecto haciendo referencia a esta exigencia de disociación, y en consecuencia:

1. Dar al primer párrafo del artículo 45.1 la siguiente redacción:

“A los efectos de la elaboración de estadísticas, los Colegios profesionales recopilarán periódicamente los datos que resulten necesarios sobre el servicio prestado y sus beneficiarios teniendo en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo. **Dicha información incluirá** en todo caso los datos identificativos de los Abogados y Procuradores, los servicios prestados y el resultado estimatorio o desestimatorio obtenido, incluyendo el número de resoluciones procesales de archivo por falta de subsanación de defectos procesales, **sin incorporar en ningún caso los datos identificativos de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.**



Reglamentariamente se podrá prever que las estadísticas incorporen otros datos adicionales. Los Colegios profesionales pondrán esta información en conocimiento de las Administraciones públicas competentes.”

2. Modificar la redacción del artículo 45.2 del Anteproyecto, resultando la siguiente:

“En todo caso, los Consejos Generales y los Colegios profesionales estarán obligados a presentar dentro de los cuatro primeros meses de cada año una memoria anual sobre el funcionamiento de los servicios de asesoramiento, orientación jurídica, asistencia letrada y asistencia jurídica gratuita durante el año anterior, en la que deberán incorporarse datos precisos sobre el cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad establecidos. En esta memoria se indicará el número de sentencias recaídas cuando alguna de las partes tuviera reconocida la asistencia jurídica gratuita y su carácter estimatorio o desestimatorio, así como los recursos interpuestos y el orden jurisdiccional al que se referían aquellas resoluciones. El Gobierno podrá prever reglamentariamente otras previsiones que se hayan de hacer constar en la memoria anual, **sin incorporar en ningún caso a la misma los datos de carácter personal de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita o de los profesionales que hubieran prestado el servicio.**”